

Movimiento barrial en tiempos de “Guerra Popular”: AAHH. Laura Caller-Los Olivos entre 1989 a 1992.

Alan Arturo Pelayo Soriano.

Cita:

Alan Arturo Pelayo Soriano (2019). *Movimiento barrial en tiempos de “Guerra Popular”: AAHH. Laura Caller-Los Olivos entre 1989 a 1992.* XXXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Lima.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-030/2062>



Movimiento barrial en tiempos de “Guerra Popular”:

AAHH. Laura Caller-Los Olivos entre 1989 a 1992.

Alan Arturo Pelayo Soriano

Resumen

La investigación trata sobre el movimiento barrial y su relación con la “guerra popular” iniciado por el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Siendo el interés de analizar el accionar político que tuvieron los barrios populares, sus pugnas y posiciones políticas; como también su lucha por el derecho a la vivienda, en el periodo de guerra interna en el Perú, específicamente en el asentamiento humano Laura Caller – Los olivos entre los años de 1989 a 1992.

Palabras clave

Actor social; Barrios populares; Partido Comunista del Perú; Sendero Luminoso; Violencia política, Estado peruano.

Introducción

En plena guerra interna la población del asentamiento humano Laura Caller se convirtió en sujeto político, era un grupo social que abarcó un espacio inhabitado, vacío, pero empezaron a construir un lugar que sea habitable; para hacerlo tenían que enfrentarse a las fuerzas armadas del Estado peruano en plena guerra interna a finales de los años 1980. En esta confrontación política, la población fue creando el espacio inhabitado en el asentamiento humano Laura Caller.

Esa población no era una clase social compacta, no era una unidad, sino una multitud, es decir una multiplicidad de singularidades, donde podemos encontrar una gama de diferentes grupos sociales diferenciados como obreros, comerciantes, ambulantes, etc. Esas prácticas colectivas ponían en cuestión el viejo orden y forjaban e iniciaban una nueva vida en sus chozas de esteras en Los Olivos de la zona norte de la ciudad de Lima.

La multitud como sujeto político en pos de construirse a sí mismo en el movimiento social, no era un ente aislado, sino que en la época de la guerra interna les era obligatorio entrar en relación con los levantados en armas, o sea con el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. En el marco de la Guerra Popular -como lo llamaban los comunistas peruanos de Sendero Luminoso- y en su etapa de equilibrio estratégico que empezaba en 1988, la dirección central del PCP-SL había planteado



organizar, los que ellos denominaban, los “cinturones de miseria” para la conquista del poder del Estado. Siendo Laura Caller un “cinturón de miseria”, una población que empezaba a crear un AAHH, era importante para Sendero Luminoso relacionar fuerzas con dicha población. Los unos querían conquistar el poder del Estado peruano, los otros querían tener un espacio donde vivir. Estas dos voluntades van a confluir, no necesariamente en armonía, para desarrollar un movimiento social contra el Estado.

Con esto, queremos decir, que población no ha estado ajena ni pasiva en la guerra interna, no ha estado en medio de las fuerzas de represión del Estado y los maoístas peruanos, sino que les tocó asumir una posición en el movimiento social. La multitud se mueve en el movimiento social de plena beligerancia armada.

El problema de la investigación

La investigación trata sobre el movimiento barrial y su relación con la “guerra popular” iniciada por el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Siendo el interés de analizar el accionar político que tuvieron los barrios populares, sus pugnas y posiciones políticas en el periodo de guerra interna en el Perú, específicamente en el asentamiento humano Laura Caller – Los Olivos entre los años de 1989 a 1992. Y cómo en plena guerra interna, en el periodo denominado por PCP-SL como etapa de equilibrio estratégico de la guerra popular, la multitud de los barrios populares se fue parcializando al asumir una posición, ya sea a favor de la lucha armada maoísta o del Estado peruano. El proceso de constitución como sujeto político de este asentamiento humano, donde los dirigentes sociales, tuvieron una parcialización política en esta disyuntiva de guerra, lo que niega la posibilidad de que los barrios populares sean sujetos contemplativos, sin capacidad de transformación social.

- ¿Cómo fue la lucha de las multitudes como sujeto político en la obtención del derecho a la vivienda en el contexto de la guerra interna?
- ¿Cuál fue la relación entre las multitudes del AAHH. Laura Caller – Los Olivos con los subversivos maoístas de PCP – SL?
- ¿Qué pugnas internas había en el movimiento social del AAHH. de Laura Caller – Los Olivos finales de 1980?
- ¿Cómo se desarrolló la organización barrial como sujeto político en el asentamiento humano Laura Caller – Los Olivos entre 1988 a 1992 en el contexto y dentro de la violencia política generando la parcialidad política en el movimiento barrial?



Hipótesis

El movimiento barrial a finales de la década del 80' en el AAHH. Laura Caller- Los Olivos empezó a tener mayor organicidad y fortaleza, esto permitió que se pueda contener y resistir el desalojo violento de los policías. Las multitudes barriales empezaron a generar comité de lucha, de propaganda, de defensa, de “choque” para poder asegurar el derecho a la vivienda. Que a la par de la “guerra popular” y con los subversivos maoístas que empezaban a organizar en los barrios populares, entraban juntos con las multitudes barriales para realizar la defensa de la vivienda. Ese frente de lucha, era bien aprovechada por el PCP-SL para generar apoyo de y futuras bases para realizar la “insurgencia popular”. Sin embargo, dentro de Laura Caller, el movimiento barrial no era homogéneo, había pugnas internas. Algunos dirigentes, no miraban con “buenos ojos” a los subversivos maoístas, esto se debe a que el Estado había elevado su guerra de baja intensidad, además la “guerra sucia” y “acciones terroristas” de ambos bandos. Realizaba los “rastrillajes”, las desapariciones, los asesinatos; y como consecuencia, dentro del movimiento barrial, se generaba la parcialidad política, algunos dirigentes estaban con el Estado, mientras que otros se plegaban al PCP-SL. La multitud barrial se convirtió en “arena de combate”, donde se empezaba a ver las disociaciones, divergencias y pugnas por tratar plegarse a uno u otro grupo de político. El movimiento barrial como sujeto político estaba en todo su esplendor realizando alianzas peligrosas en plena “guerra popular”.

Variables

Variable independiente

- El movimiento barrial como multitud y como sujeto político.
- El PCP-SL y su relación con las barriadas.

Variable dependiente

- El derecho a la vivienda.
- La parcialidad política de la multitud barrial.

Indicadores

- Los militantes del PCP-SL que actuaban en el AAHH. Laura Caller.
- El barrio popular como multitud en Laura Caller.
- La organización del barrio popular como sujeto político en Laura Caller.
- El movimiento barrial y las acciones políticas y sociales.



Justificación del estudio

Dentro de las investigaciones en sociología, e incluso, en las investigaciones actuales son escasos los trabajos que se han hecho sobre la organización de los actores sociales de un asentamiento humano por el derecho a la vivienda en el contexto de la guerra interna en el Perú. Muchos han trabajado a los movimientos sociales en los barrios populares en una etapa de pre-guerra o no-guerra; en la literatura social, por lo menos en el Perú, no se ha encontrado un trabajo que relacione el movimiento social de los barrios populares con la guerra iniciada por el PCP – SL contra el Estado peruano. Esto me anima a seguir analizando esta conexión de barrios populares con los subversivos maoístas en contexto de guerra, pues puede servir para situaciones que pueden presentarse en el futuro próximo.

En ese sentido, esta investigación es novedosa en cuanto al tema y el enfoque que se le quiere dar.

Objetivos de la investigación

- Quiero comprender a las multitudes barriales como sujeto político que lucharon para obtener el derecho a la vivienda en el contexto de la guerra interna en los años de 1989 – 1992.
- Analizar la relación entre la multitud del barrio popular del AAHH. Laura Caller – Los Olivos con los que se levantaron en armas, los subversivos maoístas del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso.
- Explorar las pugnas internas del movimiento social en el AAH. de Laura Caller – Los Olivos a finales de los años 1980.

Antecedentes de la investigación

El antropólogo Carlos Iván Degregori realiza un balance bibliográfico de las investigaciones que ha habido sobre el PCP-SL en el libro *Qué difícil es ser Dios*, ahí plantea los diferentes autores y temas que han trabajado sobre la guerra, por ejemplo, temas sobre la memoria, estudios culturales, históricos sociales, etc.; sin embargo, hay temas que no han sido explorados. Como es el caso de “los estudios sobre la violencia en las ciudades se encuentran subrepresentados” (Degregori, 2013: 63). Y solo Jo-Mari Burt y Michael Smith han trabajado la cuestión urbana y Sendero Luminoso con solo dos artículos.

El círculo intelectual que se movía Degregori no le permitió conocer la tesis “Rompiendo el silencio: Raucana, historia de una posible base de apoyo del Partido Comunista del



Perú, o de cómo se formó el "nuevo poder" sustentada en el 2006 por el historiador sanmarquino Carlos Castillo. Es uno de los trabajos que analiza cómo el PCP-SL quiso formar una posible base de apoyo en un barrio popular.

Sin embargo, hasta el presente año no existe abundante bibliografía sobre el tema planteado. Hay artículos donde tratan el tema de modo tangencial, pero no a profundidad ni como eje central de investigación.

No ha existido en la historia republicana del Perú un movimiento social tan radical como el del PCP-SL, o como lo llama Simon Strong "El movimiento subversivo más letal del mundo". Que haya trasgredido todas las estructuras sociales, que ha hecho participe tanto al canillita de la parada como a un gran empresario miraflorentino, o a un campesino olvidado y excluido en los andes del Perú como a un gran inversionista de Europa o EEUU. Entonces se hace importante estudiarlo, analizarlo y debatirlo. Y por esa razón opté estudiar uno de los tantos temas de la violencia política en el Perú: el movimiento barrial en tiempos de guerra.

A continuación, trabajaré los antecedentes de la investigación.

La politóloga norteamericana Jo-Marie Burt en la obra "Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori" que publicó en el 2009, trabaja el tema de barrios populares y violencia política en el capítulo II. Las zonas grises y la subversión: Sendero Luminoso y la batalla de Lima. Y tiene tres subcapítulos: 1.- Los cinturones de hierro de la miseria. 2.- En las zonas grises: los estados de Sendero Luminoso. 3.- La batalla de Villa El Salvador. Ahí plantea la siguiente idea sobre la relación que hubo entre Sendero Luminoso y los barrios populares.

"En última instancia, lo que sugiere es que el éxito de la organización de Sendero Luminoso entre los pobres urbanos dependía de su distribución de bienes socialmente deseados, lo que refleja un patrón complejo y dinámico de comportamiento político entre los grupos subalternos peruanos". (Burt, 2009: 204).

Según la politóloga, la relación PCP-SL y barrios populares se da a partir del intercambio de ciertos servicios y bienes. Eso significa que había una relación pragmática entre estos dos agentes sociales. Los bienes y servicios que hizo posible la relación entre el PCP-SL y el barrio de Villa El Salvador fue el de seguridad pública, castigo y escarmiento por corrupción, control de precios justos, toma de tierras. Lo que generó, según Jo-Marie Burt, es que surjan los micro-estados. "En el caso de las barriadas de Lima, Sendero



Luminoso creó micro-Estados en los cuales se convirtió en una suerte de autoridad local que impartía juicio y castigo en casos de corrupción y delincuencia” (Burt, 2009: 207).

Si bien es cierto, la relación era de intercambio de bienes y servicio entre el PCP-SL y los barrios urbanos; sin embargo, opino, que la situación no era tan práctica, como lo realizaban los viejos partidos políticos con un asistencialismo y populismo para ganar votos, sino que en medio de la “lucha armada” y la reivindicativa de la población (mejores de condiciones de vida), los maoístas peruanos educaban políticamente, es decir politizar y ganar respaldo y apoyo en los barrios populares para la toma del poder. O sea, convertir los cinturones de pobreza en cinturones de hierro. Transformar los barrios populares en base de apoyo para su “guerra popular”.

La tesis del historiador Carlos Castillo: Rompiendo el silencio. Raucana, historia de una posible base de apoyo del Partido Comunista del Perú, o cómo se formó el “nuevo poder”. Tesis realizada en el 2006, donde estudia el asentamiento humano Raucana y su relación con el PCP-SL. La tesis trabaja desde el enfoque del PCP-SL y cómo concibe la “guerra popular”, la base de apoyo, la formación de un “nuevo poder”, la nueva organización, la guerra de baja intensidad aplicada por el Estado peruano.

El historiador Castillo manifiesta sobre su investigación lo siguiente: “El PCP desarrolló, además, una experiencia singular: creó en los extramuros de uno de los conos de Lima metropolitana un poblado piloto llamado Raucana. se trata de la primera y, a la postre, la única experiencia en su género, y ella es el tema de nuestra investigación. El estudio no solo permite analizar la formación de una base de apoyo como cualquier otra, sino también abordar su singularidad: 1) la de ser un poblado fundado específicamente para tal fin, y con el objetivo de ser replicado en el cinturón de pobreza de Lima, y 2) la de construir, al fundarse en las cercanías de la ciudad capital del Estado que decide combatir, la concreción de un salto cualitativo en su concepción maoístas, que en su concepción primigenia dice: las bases de apoyo deben desarrollarse solamente en el campo. En ese sentido, la investigación nos permite responder ¿hasta qué medida los pueblos que el PCP fue formando alrededor de las ciudades se inscribieron dentro de esta categoría, y qué papel cumplieron en el conflicto armado?” (Castillo, 2006).

Su trabajo trata sobre cómo se formó el “nuevo poder” en las ciudades, ese primer experimento urbano que realizó el PCP-SL para formar bases de apoyo para la insurgencia y la toma del poder. En cambio, en nuestra investigación no se busca estudiar la posible base de apoyo, porque en el AAHH Laura Caller aparece no porque el PCP-SL lo había impulsado, sino porque la necesidad de la misma población por tener



una vivienda donde vivir. En ese sentido, Laura Caller surge como un movimiento barrial para la toma de tierras y crear un techo donde vivir; este movimiento urbano se encontraba en un contexto de guerra interna. Entonces había dos movimientos sociales, por un lado, el movimiento barrial, por el otro la “guerra popular”. Lo que queremos investigar es cómo se relacionaron estos dos movimientos, sus pugnas, relaciones y alianzas.

Marco teórico

Bases teóricas

Para abordar la presente investigación tendré que saber qué es un movimiento social. Sobre este punto, el tema es prolijo, hay muchos autores y posiciones; sin embargo, uno de los autores que me basaré es el francés Alain Touraine.

La definición de Touraine sobre el movimiento social es lo siguiente: “La idea de conflicto, debe preferirse la de movimiento social”. (Touraine, 2006: 255) No entiende el movimiento social como acto pasivo o de mutuo acuerdo entre los actores sociales, sino que “El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta.” (Touraine, 2006: 255). Sin embargo, ese “actor luchando” no es actor que quiera eliminar el Estado y proponer un nuevo Estado. La fortaleza del movimiento social no es un movimiento histórico, es en el sentido que se busque la transformación de la sociedad como superación sino como alternativa dentro de la sociedad. Es decir, que el movimiento social busque pugnar por la hegemonía contra un adversario para poder lograr un bienestar.

“La acción de los movimientos sociales no está dirigida fundamentalmente frente al Estado y no puede ser identificada con una acción política por la conquista del poder; al contrario, es una acción de clases, dirigida contra un adversario propiamente social. Puede haber convergencia o alianza, jamás unificación entre un movimiento social y una acción de transformación del poder del estado.” (Touraine, 2006: 258) El movimiento barrial en el AAHH. Laura Caller no es un movimiento social que quiera tomar el poder del Estado, ese no fue su objetivo social, sino era, en un comienzo, por la lucha de la vivienda. La organización de la población pugno contra las fuerzas del orden, pero no para eliminarlos sino para hacer la resistencia y preponderancia social. En otras palabras, luchó para conseguir sus reivindicaciones sociales. “Un movimiento social no interviene solo y no está jamás separado completamente de reivindicaciones y de presiones, de crisis y de rupturas que dan nacimiento a unos tipos diferentes de



luchas. Yo llamo luchas a todas las formas de acción conflictivas organizadas y conducidas por un actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social.” (Touraine, 2006: 262).

Sin embargo, el movimiento barrial urbano del AAHH. Laura Caller – Los Olivos, en cuanto a composición social, no era algo homogéneo, sino que había una multitud. Este concepto es trabajado por Antonio Negri y Michael Hardt.

Los autores afirman sobre la multitud lo siguiente: “En efecto, al trabajar, la multitud se produce a sí misma como singularidad. Esta singularidad es lo que establece un nuevo lugar en el no lugar del imperio, una singularidad que en realidad es el resultado de la cooperación...” (Negri y Hardt, 2002: 358). En la actividad productiva se produce, no una capa social compacta, sino que se genera una multiplicidad inconmensurable, es decir todo un conjunto de grupos diferenciados que se van relacionando a través de la cooperación pero que mantienen una heterogeneidad.

Eso significa que la población no era una clase social compacta, no era una unidad, sino una multitud, es decir una multiplicidad de singularidades, donde podemos encontrar una gama de diferentes grupos sociales diferenciados como obreros, comerciantes, ambulantes, etc.

Esas prácticas colectivas ponían en cuestión el viejo orden y forjaban e iniciaban una nueva vida en sus chozas de esteras en Los Olivos de la zona norte de la ciudad de Lima.

Una de las características importantes de la multitud es la soberanía. “El movimiento autónomo es lo que define el lugar propio de la multitud.” (Negri y Hardt, 2002: 360). Claro, el movimiento barrial no estaba sujeto al PCP-SL, porque no era una base de apoyo, sino un movimiento social que surgió por la conquista del derecho a la vivienda. Y que en proceso hubo alianzas entre la organización barrial de Laura Caller y los integrantes del PCP-SL encargados de hacer trabajo político en la zona norte de Lima.

Cuando la multitud tiene autonomía se convierte en sujeto político. “La organización de la multitud como sujeto político, como posse, comienza pues aparecer en el escenario mundial.” (Negri y Hardt, 2002: 372) La multitud como sujeto político en pos de construirse a sí mismo en el movimiento social, no era un ente aislado, sino que en la época de la guerra interna les era obligatorio entrar en relación con los levantados en armas, o sea con el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. En el marco de la Guerra Popular -como lo llamaban los comunistas peruanos de Sendero Luminoso- y



en su etapa de equilibrio estratégico que empezaba en 1988, la dirección central del PCP-SL había planteado organizar, los que ellos denominaban, los “cinturones de miseria” para la conquista del poder del Estado. Siendo Laura Caller un “cinturón de miseria”, una población que empezaba a crear un AAHH, era importante para Sendero Luminoso relacionar fuerzas con dicha población. Los unos querían conquistar el poder del Estado peruano, los otros querían tener un espacio donde vivir. Estas dos voluntades van a confluir, no necesariamente en armonía, para desarrollar un movimiento social contra el Estado.

Con esto, queremos decir, que población no ha estado ajena ni pasiva en la guerra interna, no ha estado en medio de las fuerzas de represión del Estado y los maoístas peruanos, sino que les tocó asumir una posición en el movimiento social. La multitud se mueve en el movimiento social de plena beligerancia armada. La población luchaba por la vivienda y sendero luchaba por el poder del Estado, estos dos movimientos sociales no eran antagónicas, sino que se compaginaban. Eso significa que la población como sujeto político no un ente neutral, sino que de alguna manera apoyó a los senderistas.

El trabajo de investigación va ser sobre cómo considerar a la guerra de los años 80' realizado por el PCP-SL, ya que hay muchas posiciones conceptuales, por ejemplo: Guerra interna, conflicto armado, terrorismo o guerra popular. Incluso si no lo consideras como un movimiento terrorista, te ponen el apelativo de terrorista. La estigmatización impide que se apertura el debate, y, sobre todo, que se pueda comprender cuales fueron los móviles y acciones que realizaron los que se levantaron en armas contra el Estado peruano. Sin embargo, para realizar esta investigación y no caer en los prejuicios sobre esta organización maoísta, voy a trabajar sus propias fuentes, ir a comprender su discurso político/militar con el objetivo central de cómo los maoístas peruanos concibieron el movimiento social como la guerra que ellos realizaron.

La “guerra popular” es una estrategia militar planteado por el comunista Mao Tse Tung, que fue aplicado a China para la toma del poder. En el Perú, los maoístas peruanos van a querer aplicar esa estrategia militar. La guerra popular o también llamado guerra prolongada es una guerra que se desarrolla en el campo para después tomar la capital. Y consta de tres etapas bien marcadas.

- La defensiva estratégica: El enemigo es fuerte y nosotros débiles.
- El equilibrio estratégico: Las fuerzas tanto del enemigo como el de nosotros se equiparán.



- La ofensiva estratégica: Las fuerzas de nosotros es fuerte y la del enemigo débil.

“Pero el objetivo es que hay una disparidad grande entre las fuerzas del enemigo y las fuerzas nuestras y para pasar, nosotros, de débiles a fuertes requerimos un tiempo en el cual los defectos del enemigo se expresen y nuestras ventajas se desarrollen. Por eso decimos que el ejército nuestro es aparentemente débil pero en esencia es fuerte y el ejército enemigo es aparentemente fuerte pero en esencia es débil. Así, para pasar de débiles a fuertes tenemos que llevar adelante la guerra prolongada y ésta tiene tres etapas: la primera es el periodo de la ofensiva estratégica del enemigo y la defensiva estratégica nuestra. La segunda será el periodo de la consolidación estratégica del enemigo y de nuestra preparación para la contraofensiva. La tercera será el periodo de nuestra contraofensiva estratégica y de la retirada estratégica del enemigo.” (PCP, 1989: 360).

En noviembre de 1991 el PCP, escribió este documento: ¡Que el equilibrio estratégico remezca más el país! Eso significa que, para esos años, ellos (los comunistas peruanos) ya habían alcanzado la segunda etapa de la guerra prolongada. “Desde el punto de vista del desarrollo de la guerra popular, nos hemos desenvuelto así: de guerra de guerrillas a guerra de movimientos (con cuatro hitos) y hemos entrado a equilibrio estratégico. En consecuencia, el derrotero seguido y concretado, en el Plan Impulsar y sus tres tareas campañas, en cuanto a guerra popular, ha alcanzado el equilibrio estratégico y entrado a impulsar preparativos de la insurrección en ciudades.” (PCP, 1991). La llegada de la segunda etapa de la guerra popular, les ha permitido realizar un trabajo mucho más intenso en las ciudades. Llegar a este nivel de la guerra es presentir el final del orden social vigente, la democracia formal, el “capitalismo burocrático”.

Ya en Lima, el movimiento subversivo peruano, comienza a tener posicionamientos sobre las barriadas. Quiere “organizar científicamente la pobreza” para cercar y tomar el control absoluto del Estado. Este acercamiento a las ciudades ya estaba haciendo desde mucho antes, como lo menciona Gustavo Gorriti: “Contrariamente a lo que poco informados intérpretes de Sendero sostuvieron en 1987 y 1988 (que esta organización empezaba recién entonces a enfatizar la acción urbana a expensas de la rural).” (Gorriti, 2008: 121).

“En primer lugar, el PCP-SL, durante su Primer Congreso, definió como nuevo objetivo de su plan de “guerra popular” que el “equilibrio estratégico remeciera todo el país”. Para ello, planteó como eje de acción acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, principalmente en Lima. Así, el PCP-SL incrementó notablemente sus ataques y actos



terroristas, endureciendo su relación con la población en la sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizándolo sus bases urbanas hacia la realización de ataques y atentados más violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisión se iniciaba el segundo “pico” estadístico de víctimas en la guerra interna.” (Hatun Willakuy, 2004: 72).

A partir de estas consideraciones sobre el PCP, vamos a analizar su actuar, cómo organizaba y qué organizaciones tenía en las barriadas de modo general, pero centralmente, nos vamos a concentrar sobre el AAHH Laura Caller, Los olivos.

Sobre el distrito de Los Olivos, el asentamiento humano “Laura Caller”. La importancia de este asentamiento radica en su ubicación geográfica, pues se encuentra en la entrada a Lima, al venir del norte. Está localizado apenas a pocas cuadras de la carretera Panamericana Norte, lugar de ubicación estratégica para lo que sería una futura base de apoyo, para que desde allí el PCP consiga apuntalar el cerco que se había propuesto construir en el largo plazo. El accionar del PCP en Laura Caller -por lo que se sabe- tuvo características similares al que desarrolló en Raucana y, si bien no fue de la misma magnitud, dejó los fundamentos para que se desarrollara de la misma forma.

Las tierras que tienen la población de Laura Caller perteneció a la mutual de vivienda Puerto Pueblo. El presidente de la mutual fue Julio Cruzado Zavala, secretario del sindicato CTP aprista. La mutual tendrá malos manejos, hay comisión interventora, le declararon en liquidación en 1989. Es en esa situación de crisis de la mutual es donde se desarrolla la toma de tierras. Fueron ocho asentamientos humanos del programa Confraternidad: Enrique Milla Ochoa, Los Norteños, Juan Pablo II, San Martín de Porres, Armando Villanueva del Campo, Laura Caller, Los Olivos y Los Olivos de Pro.

Esta invasión no es la invasión clásica desde el campo a la ciudad, que se desarrolló en la década 60', 70' y 80', donde surgieron barriadas como El Agustino, Zarate, Villa El Salvador, etc. Podemos decir que esta toma de territorio se dio a partir de los invasores ya posesionados, personas que tenían ya vivienda pero que sus hijos, sobrinos, tíos de los alrededores del actual distrito de Los Olivos como San Martín de Porres, Independencia, Comas van a realizar la invasión. Es la invasión de los invasores ya posesionados.

La invasión se inició en febrero de 1989, pero no fue hasta el 8 de noviembre del mismo año que se posesionaron del fundo. Trajeron palos y esteras, y se ubicaron en lo que se llamaría el AAHH Laura Caller, fueron alrededor de 400 a 500 familias. Una vez



realizado la toma de tierra, la población manifiesta lo siguiente: “Ya tomamos la tierra, ¿ahora cómo nos mantenemos? Teníamos que crear organización”. Comienza a surgir el sujeto político, a crearse la organización de la población, la autocreación para el movimiento social. Además de crearse el comité de autodefensa, se creó un tópico porque había muchos heridos producto de la confrontación con la policía. Después de 4 a 5 meses empezaron dividir las tierras y lo hicieron a crear las manzanas, que eran con letras A, B, C, etc., después se convertirán en números.

“El 20 de abril de 1990 fue una fecha importante para nosotros”, afirma el poblador. Porque es el día de que va haber una fuerte represión policial con cerca de 2000 efectivos que vinieron a desalojarlos. El juez Ruiz Trigos ordena entrar a los policías. Y bloqueamos toda la panamericana, y se enfrentaron a los policías para impedir el desalojo. Después de ese hecho, a la semana vinieron el ejército a realizar el rastrillaje. Acá hubo 5 rastrillaje, todo Laura Caller estaba acordonado, ellos tenían una lista de todas las chozas, además de buscar choza por choza para ver si se encontraba con algún senderista. Para ese entonces los senderistas ya se encontraban apoyando las medidas de lucha de población. En ese momento se había realizado una relación entre la población del AAHH con los senderistas. Eso les va permitir ganar fuerza para enfrentar a los policías y mantenernos por el lote de tierra.

Marco conceptual

- **Movimiento social:** El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta.
- **Multitud:** multiplicidad inconmensurable y heterogéneo. Al trabajar se produce a sí misma en su singularidad.
- **Sujeto político:** es la acción social de modo autónomo que se autoorganiza, se autocrea y lucha contra la hegemonía.
- **Guerra popular:** es una guerra prolongada del campo a la ciudad y que tiene tres etapas: la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico y la ofensiva estratégica.
- **Barriadas:** No solo se refiere a un espacio físico de viviendas y servicios básicos poco desarrollado, sino que también denota una forma de acceso a la vivienda a través de invasiones de tierras organizadas y a un eventual desarrollo gradual de las viviendas y otros servicios básicos, por lo general mediante esfuerzos de ayuda mutua de los pobladores de estas zonas.



Metodología

Tipo y nivel de investigación

Mi trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, que se base en el análisis sobre los actores sociales, como concibieron y percibieron el movimiento social de la toma de tierras, su organización y sus vivencias sociales para obtener el derecho a la vivienda en plena “guerra popular”. Llevando a cabo la investigación a profundidad, específicamente en las barriadas del norte de Lima (Asentamiento humano Laura Caller- Los Olivos entre los años de 1989 a 1992).

El nivel de investigación es comprensivo, pues se va intentar de entender y comprender a las multitudes sociales y los integrantes de PCP-SL en la dinámica de pugna y lucha por reivindicaciones y toma del Estado.

Descripción del ámbito de la investigación

La investigación se llevará a cabo en el asentamiento humano Laura Caller- Los Olivos

Población y muestra

Se hará la entrevista a personas que presenciaron o tuvieron un rol allegado o importante con el apoyo barrial en Laura Caller, al PCP.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicarán las siguientes técnicas de recolección de datos:

- 10 Entrevistas en profundidad directiva.
- Análisis de cada entrevista.
- 20 Testimonios

Los instrumentos a utilizar son:

- Observación directa.
- Observación indirecta.

La recopilación documental, periódicos, revistas, folletos, videos.

Referencias

Burt, Jo – Marie. Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. IEP. Lima. 2009.

Castillo, Carlos. Rompiendo el silencio. Raucana, historia de una posible base de apoyo del Partido Comunista del Perú, o cómo se forjó el “nuevo poder”. UNMSM. Lima. 2006.



Degregori, Carlos Iván. Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980 – 1990. IEP. Lima. 2013.

Gorriti, Gustavo. Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Editorial Planeta. Lima. 2008.

Guzmán, Abimael. “Entrevista con el presidente Gonzalo”. Lima 1988.
<http://www.blythe.org/peru-pcp/docs_sp/entrevis.htm>

Hatun Willakuy Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Perú. Lima. 2004.

Negri, Toni y Hardt, Michael. Imperio. Editorial Paidós. Buenos Aires. 2002.

Strong, Simon. Sendero Luminoso. El movimiento subversivo más letal del mundo. Editorial Perú Reporting. Lima 1992.

Touraine, Alain. Los movimientos sociales. Revista Colombiana de Sociología. N° 27. 2006, pp. 255-278.

Partido Comunista Del Perú. Somos los iniciadores. Agosto. 1980.

“¡Que el equilibrio estratégico remezca más el país! Noviembre. 1991.

No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder para el pueblo. Febrero 1985. Bases de discusión. S/F. Revolución democrática. S/F. Línea militar. S/F.

Quando a justiça cala as ruas: Estudo de caso de um processo judicial contra 18 manifestantes em São Paulo.

Mariana Pinto Zoccal

Resumo

Desde as manifestações de junho de 2013 diversas violações ao exercício do direito de protesto têm sido observadas em âmbito do Executivo, Legislativo e Judiciário no Brasil, apontando para uma criminalização das várias formas de contestação e resistência social. Apesar de as instituições democráticas, ao menos formalmente, se encontrarem em funcionamento, observamos a consolidação de um contexto de “guerra permanente”, caracterizado pela relativização de direitos e garantias fundamentais e pelo empobrecimento da subjetividade. O presente projeto de pesquisa pretende analisar os “enquadramentos” de manifestantes fornecidos pelo sistema de justiça criminal, em um processo que resultou da prisão de 18 jovens, momentos antes de comparecerem a uma manifestação popular contrária ao impeachment de Dilma Rousseff, em São Paulo. “Ser enquadrado” significa ser objeto de uma armação, de uma tática mediante a qual provas são manipuláveis para que uma acusação falsa pareça verdadeira. Assim, no intuito de compreender como esse artifício de perseguição política é produzido, objetivamos investigar: a) como os manifestantes e as suas subjetividades foram retratadas nos autos do processo; b) quais os indícios e as provas utilizados para lastrar a perseguição penal; c) qual o perfil dos 18 manifestantes. Para tanto utilizaremos metodologia empírica, de abordagem qualitativa, com estratégia de estudo de caso e a técnica de análise documental. O caso foi escolhido por ser emblemático nos debates sobre democracia e direitos humanos no Brasil, além de contar com grande repercussão midiática e social.

Palavras chave

Sistema de justiça criminal; Estudo de caso; Manifestação; Criminalização; Democracia.

Introdução

Nesse *paper* apresentaremos um resumo expandido do desenho inicial da pesquisa de mestrado em desenvolvimento junto ao Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), *campus* Franca/SP. Trata-se de pesquisa em fase intermediária, que ainda foi submetida ao Exame de Qualificação.

Atualmente, temos observado a aplicação de uma lógica de guerra contra ativistas e defensores de direitos humanos no Brasil. Movimentos sociais críticos que tencionam o poder público por melhores condições de moradia, de transporte e de educação convivem com a corriqueira repressão estatal, que a partir de junho de 2013 teve o seu *modus operandi* sofisticado, apontando para uma verdadeira articulação entre os poderes Executivo, Legislativo e o Sistema de Justiça para criminalizar lutas pela efetivação do direito à cidade.

Nesta pesquisa, buscamos estudar o processo judicial nº 0074736-77.2016.8.26.0050, que tramita no foro central da Barra Funda, comarca de São Paulo, envolvendo dezoito manifestantes que respondem pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e corrupção de menores (244-B da Lei 8069/90).

Fundamentação do problema

A escolha do caso se deu por ele sintetizar diversos elementos considerados emblemáticos em um Estado democrático de direito, como a infiltração de um agente do Exército em protestos; a incomunicabilidade entre advogados e clientes; a utilização de máscaras e capuzes e do porte de *kits* de primeiros socorros como indícios de cometimento de crimes; o oferecimento de uma denúncia genérica, com baixa carga probatória de autoria e materialidade e o rito moroso com que o processo judicial tem tramitado.

Maíra Machado (2017, p. 364) prevê que “em diversas situações *casos se impõem sobre nós*, isto é, o interesse pelo caso precede à identificação, com alguma clareza, do interesse da pesquisa”. O contato da pesquisadora com o caso iniciou-se em janeiro de 2017, por meio de uma notícia compartilhada pelo ex-secretário de Direitos Humanos de São Paulo Eduardo Suplicy em seu perfil na rede social *Facebook*, em que uma das manifestantes relatava não conseguir dormir após obter conhecimento da denúncia criminal contra ela oferecida.

Na denúncia, o promotor de justiça Fernando Albuquerque atribui aos manifestantes divisões de tarefas como o encargo de levar ao ato máscaras e capuzes, frascos contendo vinagre, que segundo ele, seriam “utilizados para minorar os efeitos do gás que a polícia lança para debandar arruaceiros”, disco de metal que seria utilizado como escudo e barra de ferro para “desferir golpes que lesionariam policiais e danificariam patrimônio público e particular”. Também foi atribuído a alguns a tarefa de levar materiais de primeiros socorros, que “seriam utilizados em comparsas que viessem a sofrer lesões no confronto com policiais militares, além de máscaras e capuzes” e



câmeras fotográficas e de filmagem “para registro das ações criminosas e posterior divulgação em redes sociais e outros meios de veiculação de ideias”.

Chama a atenção o fato de a denúncia ter sido oferecida após a decisão de relaxamento da prisão em flagrante dos manifestantes proferida em audiência de custódia ter transitado em julgado. Na decisão, o magistrado Rodrigo Telline de Aguirre Camargo entende como ilegal o flagrante realizado pelos policiais militares e preceitua ter ocorrido no caso uma verdadeira “prisão para averiguação”.

Após deparar-se com este caso emblemático que aponta para uma criminalização do direito à manifestação, a pesquisadora - na época na graduação em Direito - readequou o seu projeto de TCC de modo abarcar em um dos capítulos da monografia considerações sobre o incidente. Foram realizadas entrevistas com um advogado que atua na defesa de parte dos manifestantes e com o vereador Eduardo Suplicy, que relatou os acontecimentos por ele presenciados em sede policial, nos quais os jovens foram mantidos incomunicáveis, sem a possibilidade de contato com familiares e advogados.

Apesar de não ter sido possível aprofundar a análise do processo na graduação, esses contatos prévios com personagens do caso nos motivaram a dar seguimento na investigação no âmbito do mestrado em Direito, por enxergarmos o processo judicial como um rico testemunho de práticas e costumes que nos possibilitarão decifrar peculiaridades do problema posto.

Entendemos que o uso do direito penal e do processo penal para fins políticos tem representado um indicativo do avanço do Estado de Polícia no Brasil. Para Zaffaroni (2019) em cada momento histórico há determinada manipulação do poder punitivo, produzindo estereótipos e fomentando sentimentos de insegurança na população conforme a conveniência política existente. E atualmente, encontra-se em curso uma nova modalidade de controle social, segundo a qual “o inimigo já não é apenas o estereótipo de adolescente de bairro precário, do „favelado”, que vive na miséria. Agora começa a ser inimigo o opositor político” (Zaffaroni, 2018).

Essa nova modalidade punitiva recebe o nome de *lawfare*, e nasce de uma combinação de setores dos monopólios do poder financeiro e midiático com a administração da justiça penal, sob o pretexto de perseguir delitos de corrupção (Zaffaroni, 2019). O conceito foi utilizado pela primeira vez em 2001, em um ensaio de Charles Dunlap, e foi tido como “estratégia de uso – ou não uso – do Direito como um substitutivo dos meios



militares tradicionais para atingir um objetivo de combate de guerra” (Santoro, 2018, p. 63).

Temos observado em processos judiciais contra manifestantes que as sentenças costumam ser proferidas em períodos estratégicos de instabilidade política. Exemplo recente foi a sentença condenatória do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal da Capital, em um caso envolvendo 23 ativistas no Rio de Janeiro. A luta dos ativistas na arena judicial tem sido travada desde julho de 2014, tendo a última audiência ocorrido em dezembro do mesmo ano. No entanto, a sentença apenas foi proferida em julho de 2018, cerca de três meses antes das eleições presidenciais e em um contexto de intensas mobilizações sociais pela liberdade e a candidatura de Luís Inácio Lula da Silva para a presidência do país.

Essa condenação, no cenário político em que foi enunciada, permite-nos questionar se as prisões e os processamentos de ativistas de direitos humanos têm figurado como instrumentos do sistema de justiça para calar as ruas e negar a militantes políticos o direito de reivindicar a construção de outro projeto de sociedade, que se mostre plural, inclusivo, libertário e garantidor de direitos básicos para o exercício da cidadania.

Corroboramos a hipótese de que os direitos, as garantias fundamentais e os valores democráticos passaram a ser tratados como mercadorias, portanto, como objetos negociáveis ou obstáculos que podem ser facilmente afastados em nome dos interesses repressivos do Estado (Casara, 2017).

Nesse sentido, o sistema de justiça tem aderido a uma lógica de controle dos indesejáveis ao projeto neoliberal, promovendo o “enquadramento” de manifestantes, a produção de armadilhas ou incriminações falsas ou fraudulentas, com base em provas plantadas que, no final das contas, “provam” a culpa dos acusados. Quando esse “enquadramento” é produzido, o estatuto de culpado se torna uma conclusão inevitável do espectador (Butler, 2018, p. 23).

Ao enquadrar manifestantes nas categorias de “vândalos” e “criminosos mascarados”, alguns personagens do sistema de justiça parecem antecipar a culpabilidade dos jovens por ações que possam ser por eles praticadas, produzindo um estado de guerra contra os agentes policiais que buscam preservar a “ordem e a paz pública”. A repressão penal, no entender de tais personagens, deve se dar de forma enérgica e dura, pois a neutralização de tais “arruaceiros” é requisito fundamental para que o “cidadão de bem” possa exercer o seu direito ao protesto pacífico. Afinal, entendem que manifestar-se é



um direito, mas que devem atuar para que uma “minoría de criminosos” não macule a imagem dos demais manifestantes.

Nesse debate, Butler (2018, p. 08/09) elucida que algumas vezes um movimento é considerado antidemocrático, criminoso e até mesmo terrorista, e, em outras ocasiões e contextos, o mesmo movimento é entendido como um esforço popular para a concretização de uma democracia mais inclusiva e substantiva, alterando-se o discurso conforme a aliança estratégica designada. Assim, perfaz-se o seguinte dilema: quem realmente é “cidadão de bem” digno de exercer o direito à manifestação? E que operação discursiva circunscreve o “vândalo”, com que propósito?

Metodologia

A primeira versão do projeto de pesquisa de mestrado objetivava analisar como se operou a produção da subjetividade dos 18 manifestantes pelo sistema de justiça criminal. Para tanto, realizaríamos análise documental do processo e entrevistas com os jovens, buscando investigar as suas percepções sobre o sistema de justiça e eventuais danos acarretados pelo processo em suas vidas. No entanto, durante a pesquisa exploratória, constatamos que as vozes dos manifestantes pouco apareciam nos autos do processo, e que o arquivo por si só representava um campo potente para desnudar as estratégias de perseguição política de ativistas de direitos humanos.

Assim, buscando realizar uma análise condizente com o lapso temporal previsto para a conclusão do mestrado, alteramos o nosso objetivo geral, para lançar o foco sobre os “enquadramentos” produzido pelo sistema de justiça criminal em face dos manifestantes. Em termos metodológicos, propomos a realização de uma pesquisa empírica, de cunho qualitativo, pautada na estratégia de estudo de caso, com a utilização de dados fornecidos por documentos que integram o processo judicial.

A vertente teórico-metodológica adotada propõe compreender o fenômeno jurídico no ambiente social mais amplo, analisando-o como variável dependente da sociedade, de modo a trabalhar com as noções de eficiência, eficácia e efetividade das relações direito/sociedade. Preocupar-se-á, portanto, com a facticidade do direito à manifestação e com as relações contraditórias que ele estabelece com os demais campos: sociocultural, político e antropológico (Gustin; Dias, 2013, p. 22).

Minayo e Souza (2005, p. 42) entendem que a pesquisa qualitativa tem o condão de captar a dinâmica relacional de cunho hierárquico entre pares ou com a população. Ela



objetiva, em síntese, compreender as representações e símbolos e dar atenção, também, aos sinais evasivos que não podem ser entendidos por meios formais.

A pesquisa empírica em Direito, por sua vez, remete a uma maneira de apreender o direito que passa pela coleta e análise sistemáticas de dados da realidade social, política, econômica, cultural e institucional. Qualifica-se, portanto, como pesquisa empírica em Direito todo processo cognitivo informado ou mediado por instrumentos como entrevistas, observação direta ou participante, etc. (Sá E Silva, 2016).

Triviños (2011, p. 133) conceitua o estudo de caso como uma “categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”. Para Yin (2001) o estudo de caso é apropriado quando se pretende: a) compreender e explicar dinâmicas estabelecidas em atividades da vida real que se apresentam demasiadamente complexas; b) descrever e compreender o contexto da vida real no qual ocorreu, ou ocorre, uma dada intervenção; c) avaliar e compreender uma dada intervenção num dado contexto real, explorando as situações em que os seus resultados não são suficientemente claros.

Conforme já exposto, o fenômeno de criminalização do direito de protesto é complexo e se opera de forma camuflada. Assim, no intuito de melhor compreender as dinâmicas e relações de poder, dominação e resistência que permeiam as intervenções realizadas por atores, atrizes e instituições que compõem o sistema de justiça criminal nos protestos, foi escolhido um caso emblemático para o estudo, na esperança de que a análise pormenorizada desta unidade forneça subsídios para o enfrentamento e a superação do problema.

Maíra Machado (2017) prevê que o estudo de caso foi construído para observar um fenômeno concreto contemporâneo com o objetivo de, a partir dele, realizar inferências sobre como o processo penal concretamente opera de maneira a favorecer a reflexão, com base empírica, sobre o modo como a doutrina jurídica descreve esse modo de operar.

Conforme indicado, realizaremos análise documental de partes do processo judicial. Entendemos que esses documentos são relevantes porque fornecem pistas sobre como as instituições explicam a realidade, buscam legitimar suas atividades e dão margem para interpretações e reinterpretações, podendo gerar atribuição de significados e de sentidos diversos a um mesmo termo.



Conforme elucida Farge (2009, p. 18), o arquivo petrifica momentos ao acaso e na desordem, produzindo um efeito de certeza naqueles que o leem. A palavra dita, o objeto encontrado e o vestígio deixado tornam-se representações do real. Como se a prova do que foi o passado estivesse ali, enfim, definitiva e próxima. Como se, ao analisar o arquivo, tivéssemos conquistado o privilégio de "tocar o real".

Nossa pesquisa busca, portanto, enfrentar a opacidade desse documento, realizando um exercício de desaprendê-lo e de extrair o seu sabor. Essa extração passa por esse gesto artesão, lento e pouco rentável, em que, primeiramente, copiamos no caderno de campo fragmentos de textos que entendemos como interessantes para os objetivos do trabalho, pedaço por pedaço, sem transformar sua forma ou mesmo sua pontuação. Sem pensar muito nisso. E pensando o tempo todo. Como se a nossa mão, ao fazê-lo, permitisse ao espírito ser simultaneamente cúmplice e estranho ao tempo em que os enquadramentos dos manifestantes iam se revelando.

Na etapa atual da pesquisa iniciaremos a organização e a categorização do material de acordo com os objetivos geral e específicos inicialmente delimitados. Para isso, utilizaremos o método da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), que objetiva estudar as motivações, atitudes, valores, crenças e ideologias existentes nos textos que, à simples vista, não se apresentam claramente expostos.

Dentre as possíveis formas de avaliação dos resultados a serem realizadas, merecem destaque: a) a produção acadêmica (por meio da confecção de artigos em livros e revistas e da participação em congressos); b) a devolutiva do trabalho para os personagens envolvidos; c) a produção de uma fundamentação teórica que permita captar as sutilezas dos “enquadramentos” realizados pelos personagens do sistema de justiça criminal contra manifestantes e o direito de protesto.

Resultados e discussões

Por ora, ainda não iniciamos a etapa de organização e categorização dos dados, conforme prevê o método da Análise de Conteúdo (AC). Entretanto, da leitura exploratória do material emergiram algumas impressões iniciais do campo, relativas aos tópicos listados a seguir.

“Nenhuma investigação prévia foi feita, abordamos de forma indiscriminada”: a operação de controle de distúrbios civis

No depoimento prestado em juízo por um dos policiais militares que realizou a abordagem dos manifestantes, no tocante aos critérios por eles adotados para deliberar



sobre a necessidade da diligência de revista pessoal, merece destaque a ênfase dada ao caráter aleatório das autuações e à negativa de qualquer investigação preliminar: “Foi abordado todo mundo que estava com essas roupas escuras. Foi abordado quase todo mundo que estava na praça” (grifos nossos).

Buscamos acesso, pela Lei de Acesso à Informação (protocolo nº 61716198732), às normativas e protocolos policiais que regulamentam essas operações, que são denominadas como “Operações de Controle de Distúrbios Civis”. Nosso objetivo era o de compreender, ao menos formalmente, quais as diretrizes e critérios devem ser ponderados pelo agente policial em exercício ao optar pela realização (ou não) da revista pessoal de manifestantes. Entretanto, em todas as instâncias administrativas, tivemos o pedido de acesso indeferido, sob a justificativa de tratar-se de documentos classificados como “secrets e sigilosos”, que poderiam colocar em xeque “a defesa das missões e interesses institucionais da PMSP”.

“Padrão Black Bloc” e os indícios existentes

O delegado, na seção de seu relatório destinada à individualização das condutas, reitera abaixo dos nomes de cada um dos manifestantes a seguinte descrição:

[...] este agente criminoso foi detido por Policiais Militares na posse de Máscaras, Capuz, Trajando Vestes Escuras, nos padrões conhecidos Black Blocs [...] Estes objetos seriam utilizados para encobrir o rosto durante atos de Vandalismo e Violência, Danos Ao Patrimônio Público, Privado ou Prática De Lesão Corporal (sic).

O trecho acima foi “copiado e colado” nas 18 caracterizações realizadas, acrescentando-se em alguns casos elementos adicionais como o porte de *kits* de primeiros socorros, de uma barra de ferro, de um extintor de incêndio, de equipamentos de fotografia e filmagem, de celulares e de um *skate*.

Foi anexado ao relatório do delegado um dossiê intitulado “*As manifestações populares no Brasil desencadeadas a partir de 2013*”, de autoria própria, no qual ele manifesta o desejo de informar à autoridade julgadora “a extensão e a gravidade” das práticas coletivas orquestradas pelo “movimento perverso” denominado *Black Bloc*. No dossiê, o caso dos 18 manifestantes em momento algum foi mencionado. Apenas tratou-se genericamente das origens da tática *Black Bloc* e de suas principais diretrizes, pautadas na desobediência civil, na ação direta e na contrariedade ao sistema político e econômico vigente.



O delegado cita tanto textos de articulistas como Kim Katagiri e Reinaldo Azevedo, como entrevista concedida pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos ao Jornal Folha de São Paulo, na qual é defendida a necessidade de manutenção do caráter pacífico dos protestos, para corroborar sua hipótese de que “as cidades, tomadas pelos manifestantes, ficam totalmente paralisadas e o comércio fecha as portas com receio da violência e depredação” (sic). Assim, para ele, diante do agravamento da sensação de medo e insegurança da sociedade, faz-se necessário “o uso de força policial para manutenção da ordem e garantia do convívio social harmônico” (sic).

Dentre os questionamentos realizados pelo delegado aos jovens em sede policial, destacam-se: “O que o interrogando estava fazendo no momento de sua abordagem? Conhece alguma das pessoas autuadas em sua companhia? O contato entre vocês se deu por internet, telefone ou outro meio de comunicação? [...] Qual seria a função do interrogando no grupo de pessoas dentre as quais foi detido? [...] Já participou de alguma manifestação anterior?” (grifos nossos).

O Perfil dos manifestantes detidos

Sobre o perfil dos manifestantes, que será posteriormente comparado aos dados trazidos pelo INFOPEN, extraímos as seguintes características:

- a) sexo: 12 homens e 09 mulheres;*
- b) raça: 19 brancos e 02 negros;*
- c) idade: média de aproximadamente 22 anos;*
- d) escolaridade: ensino fundamental incompleto (01), ensino fundamental completo (02), ensino médio incompleto (02), ensino médio completo (06), ensino superior incompleto (06), ensino superior completo (04);*
- e) estado civil: todos solteiros;*
- f) profissões declaradas: arquiteto, artista plástico, malabarista, estudante, autônomo, tradutor, freelancer, funcionária em loja de shopping center, empresário, analista de sistemas e aprendiz de mecânico.*

Alguns manifestantes também declararam estarem desempregados no momento da autuação.



Leitura dos personagens do sistema de justiça sobre o direito à manifestação e a conjuntura política brasileira

Notamos no processo que alguns personagens do sistema de justiça por vezes tecem considerações sobre como entendem a efetividade do direito à manifestação e da democracia no Brasil. A partir dessas análises, faz-se possível extrair diversas moralidades e significações que influíram no enquadramento dos jovens nas categorias “padrão *Black Bloc*”, “arruaceiros”, “vândalos”, “baderneiros”, “criminosos”, “manifestantes”, “alunos exemplares” ou “pessoas de bem”.

São ilustrativos dessa tendência os seguintes discursos, proferidos pelo delegado de polícia e pelo juiz que atuou na audiência de custódia, respectivamente:

As Manifestações Populares, decorrentes da Livre Manifestação Do Pensamento, Da Liberdade De Expressão e do Direito De Ir E

Vir, são absolutamente legítimas, é Direito Sagrado De Todo Cidadão e como tais, consideram-se instrumentos da democracia. [...] Porém, havemos que ponderar que neste campo nada é absoluto, na medida em que TODOS devem respeitar seus limites, na exata medida em que correspondam a outros bens jurídicos igualmente tutelados. [...] Infelizmente, testemunhamos uma verdadeira escalada destes atos bárbaros, aumentando em incidência vertiginosamente, nos fazendo crer que uma minoria de Bandidos e Criminosos estão aproveitando estes momentos para darem vasão à esses atos bárbaros usando como pretexto o direito de manifestação e promovendo a baderna, a desordem, agressões e vandalismo. Precisamos dar um Basta nesta cultura de “tudo pode”, principalmente quando travestido, disfarçado ou imiscuído de ideologias, afinal, obrigarmos o cidadão de bem a tolerar esta situação, promovida por VÂNDALOS, seria o mesmo que lhe ceifar suas próprias garantias, tais como Integridade Física E Seu Direito De Propriedade, lembrando que também estaríamos impondo tal infortúnio inclusive ao erário público do Estado, na medida que muitos dos bens depredados nestas ações são PÚBLICOS. Estaríamos nós diante de uma situação paradoxal que para fugir de uma pecha ditatorial e repressora do passado devamos nos tornar permissivos e assim impor aos cidadãos de bem uma Anti-Ditadura, a qualquer custo!!! Claro que resquícios de um passado de opressão ainda nos assombram, mas não podemos permitir que isso nos atrapalhe em organizar nosso presente, Afinal Este Tempo Já Passou!! Mesmo!!! (Delegado, no relatório do inquérito policial).

[...] Destaco que o delito de associação criminosa, para a sua configuração, exige mais do que a mera reunião de indivíduos, exige a estabilidade do grupo tido como criminoso para praticar crimes de forma permanente. Evidentemente não é o caso dos autos. [...] Não há mínima prova de que todos se conheciam. Com efeito, os manifestantes, afinal,



poderiam simplesmente desistir de comparecer ao ato, a ele comparecer de modo pacífico ou causar algum transtorno que seria individualmente sopesado. Não há como saber, porque a polícia não permitiu a presença dos manifestantes antes de o ato de manifestação se realizar. O Brasil como Estado Democrático de Direito não pode legitimar a atuação policial de praticar verdadeira “prisão para averiguação” sob o pretexto de que estudantes reunidos poderiam, eventualmente, praticar atos de violência e vandalismo em manifestação ideológica. Esse tempo, felizmente, já passou. (Juiz, na decisão de relaxamento da prisão em flagrante).

“Eles partiriam para a destruição e o confronto”: A produção de um cenário de guerra

A expansão da lógica de guerra para o cenário dos protestos pode ser observada no emprego da expressão “confronto entre arruaceiros e policiais” reiteradamente citada na denúncia. As condutas dos acusados são descritas pelo promotor de justiça de modo a reforçar a dicotomia bélico-binária, que atribui aos policiais o *status* de amigos e aos manifestantes o de inimigos. São ilustrativos da tendência os seguintes fragmentos:

[...] os ora denunciados rumaram para a Rua Vergueiro, nº 829, Liberdade, nesta cidade e comarca, onde distribuíram referidos materiais na forma acima descrita e de onde partiriam para os locais de destruição e confronto.

A organização criminosa também convencionou que [...] levariam com eles materiais de primeiros socorros, que seriam utilizados em comparsas que viessem a sofrer lesões no confronto com policiais militares, além de máscaras e capuzes. [...] ficaram encarregados de levar consigo máscaras e capuzes, frascos contendo vinagre - utilizado para minorar os efeitos do gás que a polícia lança para debandar arruaceiros - disco de metal que seria utilizado como escudo e barra de ferro para desferir golpes que lesionariam policiais e danificariam patrimônio público e particular.

Na denúncia, a rua é caracterizada como um verdadeiro campo de batalhas, no qual dois polos adversários, munidos de armas de ataque e de defesa, procuram (des) ocupar o território em disputa. Na descrição, o vinagre parece equivaler ao gás lacrimogêneo e o disco de metal aos cassetetes e balas de borracha. Os supostos argumentos de “paridade de armas” e de “perigo de destruição e confronto” são instrumentalizados para que a intervenção do sistema de justiça contra manifestantes pareça legítima aos olhos do expectador. Essa estratégia pode ser lida, nas entrelinhas, no próprio relatório do delegado, que dispôs que:

Na atualidade, não há legislação vigente no Brasil que regule o direito à livre manifestação e, dada a essa ausência, desde 2013, quando os atos de violência e



vandalismo passaram a fazer parte destes movimentos sociais, os agentes criminosos identificados desde então vem sendo enquadrados na Lei de Segurança Nacional nº 7.170/1983, na Lei de Organização Criminosa nº 12.850/2013, ou mesmo através do Código Penal, como se mostra no presente caso [...]. Data máxima vênia, neste caso em concreto, as tipificações atribuídas às condutas dos agentes criminosos foram as mais brandas dentro desse universo de possibilidade acima mencionado e mesmo assim trouxeram a indignação dos partidários dos movimentos sociais e de alguns outros setores da sociedade que não conseguem apreciar tais posturas de forma objetiva, pautada em critérios democráticos verdadeiros, Sem Ódio Ou Paixão! (grifos nossos)

Do fragmento exposto, extraímos que a subsunção da conduta dos manifestantes aos tipos de associação criminosa e corrupção de menores foi fruto de juízo (declaradamente) arbitrário do delegado, condicionado por circunstâncias externas, como a necessidade de “vencer a guerra” e neutralizar o inimigo. O arcabouço legal, com sua característica elasticidade, foi moldado e aplicado conforme a conveniência política existente no caso.

Observamos que o *lawfare* aplicado contra os 18 manifestantes do CCSP, se comparado ao que comumente tem-se entendido por *lawfare* no âmbito da operação Lava Jato, apresenta certas peculiaridades, como a inexistência de delimitação precisa do inimigo anterior ao momento da autuação policial. A sua delimitação, entretanto, também não nos parece indeterminada.

A escolha do inimigo parece-nos determinável, de modo que, quando os protestos passam a ser lidos pelos governantes e pelas forças policiais como inscritos na categoria “desordem”, atrapalhando o comércio e afrontando os ditames do mercado, o inimigo enfim é escolhido, manipulando-se o sistema legal e midiático para promover o seu aniquilamento. E tal como se dá no processo de escolha da fundamentação legal a ser aplicada, a qualificação das vítimas nesses casos também nos parece arbitrária e, por vezes, fruto de acasos como estar no lugar errado e na hora errada.

Pela garantia da Lei e da Ordem: Um capitão do Exército infiltrado

No momento da prisão dos 18 manifestantes, foi detido junto ao grupo o capitão do Exército Willian Pina Botelho, conhecido pelo codinome “Balta Nunes”. Em razão de Balta ter sido o único detido a não ser encaminhado ao DEIC, os manifestantes passaram a desconfiar de tratar-se de um agente policial infiltrado.

A Ponte Jornalismo analisou as redes sociais do agente, localizando “sinais de um perfil falso”, como o fato de a UFRJ afirmar que “não havia ninguém com o nome Balta ou



Baltazar Nunes entre seus alunos, embora ele afirmasse ter estudado lá”. No aplicativo *Tinder*, apurou-se também que “suas conversas frequentemente misturavam paquera com perguntas sobre manifestações anti-Temer” (Ponte, 2018).

Após a detenção dos manifestantes, Balta passou a procurar “diversos militantes, nas redes sociais, para tentar convencê-los de que não era infiltrado”, alegando ter sido “levado para outra delegacia e libertado após pagar R\$ 1200,00 em suborno para um delegado da Polícia Civil”. A reportagem localizou o *Instagram* de Willian Pina Botelho e “mostrou suas imagens para cinco pessoas que haviam sido enganadas por Balta. Todas confirmaram: era a mesma pessoa” (Ponte, 2018).

As manifestações das autoridades, após a exposição da presença do capitão entre o grupo, se mostraram contraditórias. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota publicada no dia seguinte da autuação, negou “a existência de uma operação conjunta na ocasião” e afirmou que “não conhece o homem apontado pela reportagem como um suposto oficial das Forças Armadas”. Já o comandante-geral do exército, general Eduardo da Costa Villas Boas, em entrevista à Rádio Jovem Pan, afirmou que “houve uma absoluta interação com o governo do estado na prisão dos jovens do CCSP”, sem dar maiores detalhes (Ponte, 2018).

Para o Exército, o capitão não violou direitos “ao dar a aparência de aderir à conduta do grupo, nem ao observar-se as suas ações em tudo aquilo que fez de maneira ostensiva”. O ofício do Exército assegura que o capitão Botelho estava legalmente autorizado a desenvolver “atividades de inteligência” em São Paulo. A autorização estaria baseada em dois decretos federais: um, publicado em 08 de agosto, que determinava o emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e outro, de 31 de agosto, que estendia a mesma determinação para a cidade de São Paulo (PONTE, 2018, grifos nossos).

Após a publicidade do caso, diversos procedimentos de investigação foram abertos no Exército; na Procuradoria de Justiça Militar, do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial; e na Promotoria da Justiça Militar; sendo todos eles arquivados pela existência dos Decretos de Garantia da Lei e da Ordem dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (Ponte, 2018).

Em julho de 2018, entretanto, sobreveio aos autos do processo um ofício do procurador do MPF Marcos Ângelo Grimone, informando à juíza que a 7ª Câmara da Coordenação e Revisão do Controle Externo da atividade policial do MPF havia rejeitado o pedido de



arquivamento do procedimento investigatório que visava apurar a conduta de abuso de autoridade e de identidade falsa do capitão do Exército.

Todavia, a investigação realizada pelo MPF no caso também resultou em posterior arquivamento. No dia 28 de novembro de 2018, atendendo a um pedido de habeas-corpus em favor de Botelho, feito pela Advocacia-Geral da União, o TRF-3 ordenou o trancamento da investigação, por considerar que não havia indícios de crime contra o militar (PONTE, 2019).

Apesar de o major do Exército não ter sido mencionado no inquérito policial e na denúncia contra os 18 manifestantes, a sua presença no CCSP foi reiteradamente trazida aos autos do processo por advogados e pelo próprio MPF. Assim, por tratar-se de um personagem central no caso, Botelho foi arrolado como testemunha de defesa por um dos advogados. Extraímos dos memoriais apresentados pela Defensoria Pública paulista que, em seu depoimento, o Major relatou que:

[...] estava na qualidade de observador de inteligência na ocasião da passagem da tocha paraolímpica [...] Atua na inteligência desde 2013. [...] Participava de um grupo de Whatsapp, e outro de Facebook em razão da função, nos quais interagia de forma direta e geral [...] Era um meio de colher informações, horários de eventos. As conversas nos grupos eram amistosas.

Entendemos que o arquivamento de todas as investigações que buscaram apurar a conduta de infiltração do major do Exército remete-nos ao processo de blindagem das forças policiais que cometem excessos em suas abordagens contra manifestantes. Assim, legitima-se a colheita sigilosa de dados e informações relativas aos movimentos sociais, característica de períodos autoritários, nos quais não existem limites a serem observados no exercício das atividades de inteligência policial.

As reiteradas tentativas de engessamento da atuação de personagens do sistema de justiça que, no caso, buscaram expor o funcionamento subterrâneo do trato policial contra manifestantes, a nosso ver, também funcionam como uma espécie de chancela para que essas práticas autoritárias se perpetuem. Assim, sob o pretexto de manutenção da “ordem pública”, a justiça por vezes permanece omissa (ou lenta), distanciando-se da defesa do direito à manifestação, tido como de primordial importância para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.



Conclusões

Conforme exposto, trata-se de pesquisa de mestrado em andamento, cujos resultados finais são, por ora, desconhecidos. Entretanto, após a realização de ampla pesquisa bibliográfica e da leitura exploratória do campo, entendemos que o caso em tela permite-nos decifrar peculiaridades do tratamento fornecido pelo sistema de justiça criminal a manifestantes cujos protestos são lidos da chave da “desordem”. Dentre elas, destacam-se articulação de diversas instituições e personagens no processo de criminalização dos protestos; a infiltração de agentes do exército em grupos de mobilização social; a elasticidade das normas penais incriminadoras, que são mobilizadas conforme a conveniência política do momento; a vedação de acesso aos protocolos de atuação policiais em protestos; dentre outras.

Nesses casos, em que pese a Constituição Federal de 1988 considerar o direito de protesto como *prima facie* para a efetivação de outros direitos, os manifestantes são tidos como “inimigos” que devem ser neutralizados e combatidos em prol da manutenção da ordem. Para isso, o artifício de enquadrá-los como “vândalos”, “terroristas” e “baderneiros” é mobilizado pelo Estado para desestimular novas lutas sociais, fazendo dos ativistas verdadeiros “bodes expiatórios” no intuito de “calar as ruas” que clamam pela consolidação de uma democracia substancial.

Referências bibliográficas

- Bardin, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
- Butler. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Tradução Sérgio Lamarão e Arnaldo Cunha. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2018.
- Casara. Estado pós-democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2017.
- Farge, Arlette. O sabor do arquivo. Tradução de Fátima Murad. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009
- Gustin, Miracy B. S.; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re) Pensando a Pesquisa Jurídica. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013.
- Justiça absolve os „18 do CCSP”, presos com infiltrado do Exército. Ponte, 2018. Disponível em: <https://ponte.org/justica-absolve-os-18-do-ccsp-presos-com-infiltrado-do-exercito/>. Acesso: 06 set. 2019
- Machado, Maíra Rocha. O estudo de caso na pesquisa em direito. In: Pesquisar empiricamente o direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017.



Sá E Silva, Fabio de. Vetores, desafios e apostas possíveis na pesquisa empírica em Direito no Brasil. *Revista de Estudos Empíricos em Direito*, vol. 3, n. 1, pp. 24-53, jan. de 2016.

Santoro, Antonio Eduardo Ramires. Novos desenhos não democráticos no processo penal brasileiro pós-constituição de 1988: os maxiprocessos como instrumentos de lawfare político. In: *Crise no processo penal contemporâneo: escritos em homenagem aos 30 anos da Constituição de 1988*. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018.

Tribunal De Justiça De São Paulo. Processo Digital nº 0074736-77.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, São Paulo, SP, 5 de setembro de 2016. Acesso em: 06 set. 2019.

Triviños, Augusto Nibaldo Silva. *Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação*. São Paulo: Atlas, 2011.

Yin, Robert. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2001.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. "Voltamos a ter presos políticos", diz Zaffaroni, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 06 ago. 2018. In: *Revista Fórum*. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/voltamos-a-ter-presos-politicos-diz-zaffaroni-juiz-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos/>. Acesso: 27 ago. 2018.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. *Course Saber Penal Y Criminología*. 21 abr. 2019. Notas de aula.